

Conocimiento moral y justificación moral de acciones

Resumen

La meta del presente trabajo es probar que existen contextos de acción en los que tiene lugar una escisión entre el conocimiento moral de los sujetos y la justificación, también moral, de sus acciones. Para que ello ocurra, según sostendremos, deben darse tres condiciones. En primer lugar, el costo de que un sujeto actúe sobre la base de sus creencias es muy elevado para el bienestar de terceros en caso de error. En segundo lugar, existe una probabilidad significativa, aunque fuese pequeña, de que el error tenga lugar efectivamente. En tercer lugar, los afectados no han dado su consentimiento a la acción del sujeto.

Palabras clave

Conocimiento moral; costo del error; injerencia pragmática (*Pragmatic Encroachment*)

Parece natural suponer que si el conocimiento moral es posible, su valor estribará fundamentalmente en su capacidad para ofrecer a los sujetos que lo poseen una justificación, también moral, para actuar tomándolo como premisa. Supongamos que en el contexto C el sujeto S tiene que optar entre distintos cursos de acción A, B y C. Si S está justificado a creer que p y, a la luz de p, el curso de acción B aparece como moralmente preferible, entonces deberíamos concluir que S está también justificado, desde una perspectiva moral, para llevar adelante dicho curso de acción.

La meta del presente trabajo es demostrar que existen contextos de acción en los que esta conclusión no es válida; es decir, que existen contextos en los que el conocimiento moral de un sujeto no es suficiente para que se encuentre moralmente justificado para actuar. Con el objetivo de probar dicha hipótesis, en la primera sección presentaremos un caso en el que dos

sujetos, aunque comparten el mismo corpus de creencias fácticas y morales, no se encuentran en la misma situación a la hora de justificar la realización de sus proyectos. Mientras el primer agente está moralmente justificado para obrar sobre la base de sus creencias, el segundo no lo está. Como veremos, este contraste depende de una asimetría en el costo del error. El costo para el bienestar de los afectados de que las creencias sobre la base de las cuales el primer agente toma sus decisiones sean falsas es muy bajo, pero resulta significativamente alto en el caso del segundo agente. Intentaremos demostrar que esta asimetría, combinada con algunas consideraciones morales básicas, explica la existencia de una brecha entre conocimiento moral y justificación moral de la acción. En la segunda sección examinaremos una objeción a la argumentación desarrollada. Dicha objeción se apoya en la idea de que si un agente llega, en forma plausible, a la conclusión de que no está moralmente justificado para actuar sobre

la base de sus creencias morales, debería concluir que tampoco puede afirmar que tales creencias tengan el estatus de conocimiento o dispongan de una justificación apropiada desde una perspectiva epistémica.

El caso de los científicos

Tomemos como punto partida el siguiente caso.

Dos científicos, S1 y S2, se encuentran trabajando en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas de una misma teoría, TC. Aunque TC es una teoría científica relativamente nueva, se apoya en bases experimentales sólidas. Las otras premisas sobre las que los investigadores elaboraron sus proyectos derivan de creencias fácticas aceptadas por la disciplina e igualmente plausibles. S1 y S2 tienen, como consecuencia, igual probabilidad de éxito en sus proyectos y esa probabilidad es significativamente alta. Ahora bien, las motivaciones de los agentes no son solo cognitivas o prudenciales, como el progreso de su disciplina y el avance de sus carreras profesionales. Tanto S1 como S2 creen que el éxito de sus investigaciones contribuirá en forma decisiva a la mejora del nivel de ingresos de la mayoría de los miembros de su comunidad. S1 y S2 presumen que ese resultado producirá, a su vez, una mejora drástica en la calidad de vida de dichas personas. Supongamos que los científicos están igualmente justificados para suscribir estas creencias fácticas y morales adicionales. Sin embargo, hay una diferencia importante entre los dos proyectos de investigación de S1 y S2: el costo del error. Si la investigación de S1 fracasa, este resultado no tiene costos significativos para el bienestar de terceros. La situación es muy distinta en el caso de S2: si su investigación fracasa producirá un daño grave e irreparable a la calidad de vida de un porcentaje significativo de los miembros de la comunidad. Podemos imaginar que la investigación de S2 involucra la realización de experimentos muy peligrosos para el medioambiente y para la salud de los individuos afectados.

El caso que acabamos de presentar podría ser analizado desde distintas perspectivas. Aquí nos centraremos en un problema de orden moral: ¿S1 y S2 se encuentran justificados, desde una perspectiva moral, para llevar adelante sus proyectos de investigación? Como acabamos de ver, ambos investigadores parecen igualmente justificados para creer que las premisas fácticas de sus proyectos son verdaderas, que tendrán éxito en sus experimentos y que el resultado de su actividad redundará en una mejora de la calidad de vida de los miembros de su comunidad. La única diferencia entre la situación de S1 y S2 estriba en el costo del error en la realización de los planes. Nuestra hipótesis es que esa diferencia hace atendible responder que mientras no hay objeción moral plausible contra los planes de S1, puede afirmarse que S2 no se encuentra justificado para continuar con su investigación.

Veamos cómo puede defenderse esta hipótesis. La idea de que S1 está moralmente justificado para actuar resulta fácil de establecer. En su caso parece haber una continuidad aproblemática entre conocimiento fáctico y moral, por una parte, y la aceptabilidad moral de la acción que planea realizar. Si S1 está justificado desde una perspectiva epistémica para suscribir las creencias fácticas y morales que le atribuimos, por esa misma razón, estará también moralmente justificado para actuar sobre la base de dichas creencias. Después de todo, si algo saliera mal y fracasara en alcanzar sus metas, ni el agente ni otros potenciales afectados sufrirían ningún daño. Pero la situación cambia cuando se pasa de un contexto en que el costo del error es muy bajo o nulo a un contexto en que es drásticamente alto, como ocurre en el caso de S2. Imaginemos por un momento que la situación de S2 es diferente en un aspecto importante respecto a la forma en que la hemos presentado líneas atrás: el costo del error es muy alto, pero solo afecta al agente; es decir, a S2 y no a terceros. S2 cree firmemente que tendrá éxito y no sufrirá daños, pero sabe que hay muchos factores en juego y que los experimentos que va a realizar son muy peligrosos. S2 podría considerar que no vale la pena correr el riesgo de sufrir

un daño si fracasa, aunque la probabilidad de que ello ocurra sea baja. También está en su derecho decidir correr el riesgo. Ambos cursos de acción parecen igualmente aceptables desde una perspectiva moral. Pero ¿qué pasa cuando, como ocurre en el ejemplo tal como fue presentado, el bienestar de otras personas será severamente dañado en caso de error? S2 podría investigar más e intentar reducir la probabilidad de error. Sin embargo, el tiempo del que dispone será siempre limitado, y este hecho, combinado con la fallibilidad humana y una variedad de causas que entran naturalmente en juego en casos como el referido —una compleja investigación científica— hacen que la probabilidad de error sea siempre significativa. No parece haber una salida epistémica para esta situación. Los afectados, por buenos que sean los argumentos y las evidencias de las que dispone S2, siempre tendrán derecho a no estar dispuestos a correr el riesgo de que los peligrosos experimentos que involucra la investigación sean realizados, y S2 no tiene derecho —este es el punto clave— a decidir por ellos si reconoce su estatus de agentes morales plenos. ¿Por qué razón debería reconocerse a S2 el derecho especial de decidir por los afectados, sin su conocimiento o su autorización, en una cuestión que puede afectar significativamente sus expectativas vitales? Usando el vocabulario kantiano, en ese caso S2 estaría tratando a los afectados meramente como medios, simples insumos en la consecución de sus metas, y no como fines en sí mismos, es decir, agentes cuyos intereses y proyectos tienen peso propio y resultan irreducibles a los intereses y proyectos de los otros individuos.

Examinemos desde una perspectiva más amplia las implicaciones del ejemplo. Los cursos de acción que se proponen llevar adelante S1 y S2 aspiran a estar moralmente justificados sobre la base de creencias fácticas y valorativas igualmente atendibles, dotadas de una misma probabilidad de ser verdaderas o que dichos agentes tienen —si no se quiere hablar de “probabilidad”— las mismas razones para considerar verdaderas. Sin embargo, como vimos, resulta muy plausible sostener que mientras S1 está moralmente

justificado para actuar, S2 no lo está y, *ceteris paribus*, debería abstenerse de realizar sus experimentos.

La única diferencia entre S1 y S2 es el costo para el bienestar de terceros que tendría lugar si están cometiendo un error y sus acciones no producen los resultados previstos. Si los experimentos de S1 fallan ese costo es muy bajo o nulo, pero si los experimentos de S2 fallan es muy elevado. Es importante notar que este factor diferencial entre la situación de S1 y S2 no permite hacer juicio alguno acerca de la verdad o falsedad de las creencias que toman como punto de partida ambos agentes. Ello se debe a razones bastante obvias. Las consecuencias para el bienestar humano de que una creencia sea verdadera o falsa no son evidencias de su verdad o falsedad ni cuentan como “razones”, en algún sentido más amplio que el de “evidencias”, para pronunciarse acerca de esa cuestión. Si esto no fuera así, debería borrarse la diferencia entre estar justificado para creer que *p* o saber que *p* y desear que *p*.

Como vimos, que el costo del error no tenga peso cognitivo es, sin embargo, compatible con que cuente como una razón prudencial para que un sujeto que cree o sabe que *p*, decida si debe o no actuar sobre la base de esa creencia o de ese conocimiento en un contexto específico. De igual manera, el costo del error puede contar como una razón para determinar si un sujeto se encuentra o no justificado desde una perspectiva moral para actuar sobre la base de sus creencias o de su conocimiento —fáctico o moral— en un contexto específico. De modo que el sorprendente resultado frente al que nos encontramos cuando analizamos un caso como el del científico S2 es una discontinuidad entre el conocimiento moral y la justificación moral de la acción. Si tuviéramos un conocimiento moral infalible, si nunca pudieran salir mal nuestros planes o si solo actuáramos en condiciones en las que el costo para el bienestar de terceros de nuestras acciones fuera insignificante, estar justificados para creer que un curso de acción es superior desde una perspectiva moral a las otras alternativas sería indiscernible de estar justificado para actuar sobre la base de dicha creencia. Sin

embargo, como lo atestigua el caso del científico S2, en ausencia de esas condiciones, la diferencia entre estar justificados para afirmar ciertas creencias y estar moralmente justificados para actuar sobre la base de las mismas en un contexto específico resulta perfectamente comprensible y prácticamente relevante.

Una objeción contra la propuesta

Podría sostenerse, contra la posición que estamos defendiendo, que si alguien no está dispuesto a obrar sobre la base de sus creencias morales, eso es un indicio de que estas no tienen el estatus de creencias justificadas o conocimiento, y de que no está en condiciones de continuar suscribiéndolas como si tuvieran tal estatus. Si un sujeto S realmente sabe que p (donde dicha proposición es un juicio moral como “realizar los experimentos previstos es lo correcto porque promoverá el bienestar de la mayoría”) y p sugiere un curso de acción en un contexto determinado (es decir, “realizar los experimentos previstos”), S debería estar dispuesto a obrar en consecuencia. En caso contrario debería admitir que no sabe que p o que no está justificado para creer que p. De este modo, la brecha entre conocimiento moral y justificación moral de la acción que hemos intentado presentar a través del ejemplo de los científicos parece disolverse.

Esta objeción puede ser interpretada como una aplicación al plano moral de una de las ideas fundamentales de la posición conocida en epistemología como “Injerencia Pragmática” (*Pragmatic Encroachment*).¹ Los defensores de la Injerencia Pragmática (en adelante IP) sostienen que el conocimiento no es determinado exclusivamente por factores epistémicos, como las evidencias que se tengan de que una proposición es verdadera o la confiabilidad del proceso por el cual un sujeto llega a afirmar su verdad o falsedad. Las variaciones contextuales en el costo del error de actuar sobre la base de que p serían decisivas a la hora de determinar si un sujeto posee o no conocimiento.

Es frecuente apelar a casos estructuralmente similares al que presentamos al inicio del trabajo para ilustrar y defender esta posición. Los sujetos S1 y S2 poseen la misma evidencia de que p o el proceso de formación de la creencia de que p es igualmente confiable en los dos casos desde una perspectiva epistémica. El costo de que p sea falsa es, sin embargo, muy bajo en el caso de S1 y sumamente alto en el de S2. Como consecuencia de ello, parece convincente afirmar que el nivel de exigencia de los estándares de justificación requeridos para afirmar que S2 sabe que p son mucho más demandantes que en el caso de S1. De este modo, mientras puede resultar plausible sostener que S1 sabe que p, podría ocurrir que no suceda lo mismo en el caso de S2. IP implica el rechazo de una de las tesis centrales de la epistemología analítica predominante, el evidencialismo —a veces también denominado purismo² o intelectualismo—³. El evidencialismo afirma que “la creencia de que p está epistémicamente justificada para el sujeto S en un momento determinado, t, si y solo si recibe el apoyo de la evidencia que tiene S de que p en t” (Conee y Feldman, 2005, p. 83). Otra forma de expresar la idea consiste en sostener que, dados dos sujetos, S1 y S2, necesariamente si S1 y S2 disponen de la misma evidencia a favor o en contra de p, entonces S1 está justificado en creer que p si y solo si S2 también lo está.⁴ La defensa de IP involucra normalmente la apelación a una versión del principio Conocimiento-Acción. Dicho principio (en adelante PCA) estipula que S está justificado para creer que p, solo si es racional para S actuar como si p (Fantl y McGrath, 2002, p. 78).

Si un agente concluye, en un contexto determinado, que no es racional actuar sobre la base de su creencia de que p, debe concluir que no está justificado para afirmar p. Como consecuencia de ello, debe concluir también que no sabe que p, aun cuando disponga de evidencia de que p es verdadera, que normalmente, en contextos donde el costo del error es más bajo, le permitiría tanto actuar sobre la base de que p como afirmar que sabe que dicha proposición es verdadera.

IP ha sido objeto de diversas críticas. Una de las formas más frecuentes de objetar esta posición consiste en presentar contraejemplos de PCA. Se trata de casos en los que, si bien actuar sobre la base de que *p* no parece una opción razonable dado el alto costo del error, continúa siendo plausible atribuirle al agente conocimiento de que *p*. Baron Reed propone, por ejemplo, el siguiente caso:

Estoy tomando parte de una investigación psicológica que estudia los efectos del estrés sobre la memoria. Se me formula la siguiente pregunta: ¿cuándo nació Julio César? Si doy la respuesta correcta, obtengo un caramelo. Si doy una respuesta errónea, recibo una horrible descarga eléctrica. No ocurre nada si no respondo. Recuerdo que Julio César nació en 100 a. de C., pero no estoy tan seguro de ello como para que valga la pena el riesgo de electrocución. Sin embargo, tranquilamente digo para mí mismo, “sé que nació en 100 a. de C.” (Reed, 2014, p. 101).⁵

Como afirma Reed, en este escenario es perfectamente plausible que mantenga mi conocimiento aun cuando el costo del error sea tan alto como para que no resulte racional actuar sobre la base de tal conocimiento. Parece natural “continuar atribuyéndome conocimiento a mí mismo, aun cuando reconozca que no debería tomarlo como una razón para actuar” (Reed, 2014, p. 101).

No me propongo aquí evaluar la plausibilidad de IP y de PCA como tesis epistemológicas, sino su plausibilidad en el terreno ético. Esto es, cuando consideramos la cuestión de si el hecho de que un sujeto concluya que no está moralmente justificado para actuar sobre la base de sus creencias morales —o de la combinación de sus creencias morales y fácticas— en un contexto determinado, es una razón para concluir que debe abandonar la pretensión de que sabe que dichas creencias son verdaderas.

El caso de los científicos puede ser interpretado como un contraejemplo del equivalente moral del principio PCA. Dicho principio, PCA-M puede formu-

larse en los siguientes términos: S está justificado para creer que *p* (dicha proposición expresa un juicio moral), solo si está moralmente justificado para actuar sobre la base de que *p*.

Volvamos al caso de los científicos S1 y S2. Como vimos, lo que parece dejar en claro el ejemplo, si estamos en lo correcto, es que a pesar de contar con creencias fácticas y morales igualmente plausibles, el alto costo de que alguna de esas premisas sea falsa, en el caso de S2, cuenta como una razón para que dicho agente no esté justificado para *actuar* sobre la base de tales premisas. Pero que S2 no esté justificado para actuar no implica que no se encuentre igualmente justificado que el otro científico del ejemplo para afirmar sus creencias. Dado el costo del error, S2 no tiene derecho a decidir por los afectados correr el riesgo que implican sus experimentos. Pero este es un factor que no guarda ninguna relación con la cuestión de la verdad o falsedad de sus creencias fácticas y morales iniciales. El hecho de que los experimentos que debe llevar adelante S2 sean muy peligrosos para el bienestar de terceros, a diferencia de lo que ocurre con los que planea realizar S1, no ofrece ninguna razón para pensar, por ejemplo, que TC sea falsa. Si así fuera, enterado del trabajo que se propone realizar S2, S1 debería también comenzar a dudar de la verdad de la teoría en que se apoya la investigación que ambos desarrollan. Esto no parece tener ningún sentido. La situación es similar en el caso de las creencias morales involucradas. En el caso de S2 no solo entran en juego las creencias morales acerca de la relación entre progreso económico y calidad de vida de los individuos, que comparte con S1. La conclusión de que no está justificado para actuar supone una combinación del reconocimiento del elevado costo para el bienestar de terceros que tendría alguna falla al realizar sus experimentos, con la idea de que decidir por los afectados correr ese riesgo implicaría negarles el estatus de agentes morales plenos o reducirlos a meros medios para la realización de sus propósitos. Como podrá percibirse, estas últimas consideraciones morales no entran en conflicto con las creencias de S1 sobre la re-

lación entre progreso económico y calidad de vida: no ofrecen ninguna razón para dudar de que el éxito en su proyecto podría promover el progreso económico y el bienestar de los miembros de su comunidad, ni de que dicho resultado sea moralmente valioso. Como consecuencia de las consideraciones precedentes se debe concluir que la interpretación más natural del caso es que la diferencia entre la situación de S1 y S2 no ofrece ninguna razón para sacar conclusiones acerca de lo que creen o de lo que saben, sino de lo que están moralmente justificados para hacer.

Los principios PCA y PCA-M generan dificultades adicionales que expongo a continuación. Gerald Gaus ofrece un ejemplo que, aunque es presentado en un contexto de discusión distinto,⁶ puede servir para ilustrar la brecha entre justificación epistémica de creencias y justificación moral de acciones que estamos defendiendo. Como afirma el autor, con frecuencia creemos una proposición sobre la base de muy buena evidencia, pero a causa de que existe una probabilidad significativa de que podría ser errónea nos abstenemos de actuar tomándola como premisa en ciertos contextos. El ejemplo es el siguiente:

La jurado Sally puede creer firmemente que Mort asesinó a Millie, pero a causa de que hay una probabilidad pequeña pero significativa de que pudiera estar cometiendo un error y porque las consecuencias de cometer un error son tan graves, Sally no vota a favor de condenar a Mort por asesinato (Gaus, 1995, p. 242).

Gaus insiste en que de ninguna manera debemos tomar el voto de Sally como una prueba de que no cree que Mort haya cometido el crimen. De hecho, en otros contextos es de esperar que Sally actúe sobre la base de esa convicción; ella podría, por ejemplo, evitar en el futuro la compañía de Mort, a quien cree realmente culpable del asesinato de Millie. Es cierto que en algunos casos podemos equivocarnos al tomar este tipo de decisiones, pero debe admitirse que hay contextos en que constituyen el curso de acción correcto. Siguiendo con el ejemplo, resultaría muy poco plausible sostener

que a causa de que Sally no está dispuesta actuar sobre la base de sus creencias en el contexto del juicio, debería reconocer que dichas creencias son falsas. En primer lugar, la decisión de no votar la condena es una acción voluntaria que estaba en poder de Sally tomar, pero la creencia de que Mort es culpable no es algo que ella pueda cambiar a voluntad. Como señaló Bernard Williams (1989), el hecho de que no podamos cambiar nuestras creencias a voluntad no es una limitación contingente de dicha facultad, sino un resultado del hecho de que las creencias apuntan a la verdad. Creer que *p* equivale a creer que *p* es verdadera, y la verdad de las proposiciones no puede depender de nuestra voluntad o de nuestros deseos.⁷ Si Sally está firmemente convencida de que Mort es culpable, como hemos supuesto en el ejemplo citado, resulta difícil entender cómo podría dejar de creer tal cosa si no media un cambio en la evidencia de la que dispone. Por otra parte, si Sally debiera abandonar su creencia en la culpabilidad del acusado para satisfacer el tipo de consistencia con sus acciones que requieren PCA y PCA-M, debería comprometerse con otras conductas que parecen problemáticas desde una perspectiva moral. Por ejemplo, supongamos que el acusado, una vez liberado, intenta entablar una relación de amistad con Thelma, una prima de Sally. En ese caso, dado que votó contra la condena, Sally no debería decirle a Thelma que es mala idea interactuar con ese sujeto, puesto que es un asesino. Pero esto es irrazonable, no solo porque Sally no puede dejar de creer que Mort es en efecto un asesino aunque lo intente, sino porque este requisito hace a Sally, por así decirlo, esclava de una contingencia completamente azarosa: el haber sido designada jurado en el juicio. Otros conocidos o amigos de Thelma que no fueron jurados, podrían continuar creyendo que Mort es culpable, sobre la base de la misma evidencia que llevó a Sally a creerlo —supongamos que el caso recibió mucha atención en los medios de comunicación—, y estarían habilitados para aconsejar a Thelma que evite entablar una relación de amistad con Mort. ¿Por qué un hecho azaroso como no haber sido designados jurados debe poner a esos sujetos en una mejor situación que aquella en la que se encuentra Sally para honrar sus

obligaciones morales con Thelma? De modo que Sally, si no advirtiera a Thelma acerca de la peligrosidad de Mort, no podría evitar pensar que estaría faltando a las obligaciones que le impone su relación con ella, contra sus creencias y por razones contingentes que no parecen tener peso cognitivo o moral alguno. A menos que aceptemos la problemática tesis de que podemos cambiar nuestras creencias a voluntad, debemos concluir que PCA y PCA-M generan resultados implausibles. Si se rechazan dichos principios y se admite que existe, en ciertos contextos, una brecha entre nuestras creencias fácticas y morales y las acciones susceptibles de ser justificadas desde una perspectiva moral sobre la base de dichas creencias, estas dificultades desaparecen. En distintas circunstancias —como muestran los ejemplos que estamos considerando— pueden tomarse decisiones diferentes que coexistan, sin embargo, con un trasfondo de creencias que permanecen estables. Estas creencias que permanecen estables pueden ser apropiadas como premisas de las decisiones del sujeto solo en algunos casos. Sally puede —como ocurre en el ejemplo— considerar que su creencia en la culpabilidad de Mort no es suficiente, en el contexto del juicio en el que actúa como jurado, para justificar que vote por la condena, dado el enorme costo que tendría para el acusado que estuviera cometiendo un error. Sally piensa que obraría mal si votara la condena del acusado aunque crea en su culpabilidad, pero puede considerar que dicha creencia, que de hecho suscribe, sí justifica aconsejar a Thelma que se mantenga alejada de Mort. No alertar a Thelma equivaldría a obrar en forma moralmente reprochable. Sally podría, de este modo, ofrecer una explicación plausible tanto de su creencia de que Mort es culpable como de las razones por las que actúa de modo diferente en contextos también diferentes. Esta posibilidad de dar una explicación razonable de sus creencias y comportamientos no sería posible si la objeción que estamos considerando fuese correcta. En ese caso, si la objeción fuese correcta, debería conducirnos a aceptar una suerte de contextualismo de las creencias y del conocimiento. Si Sally no está dispuesta a actuar sobre la base de su creencia o de su conocimiento falible en la culpabilidad de Mort en el contexto

del juicio, debería reconocer que ni cree ni, por supuesto, sabe, que Mort es culpable. En caso de que luego decida desaconsejar a Thelma entablar cualquier clase de relación con Mort, debería afirmar que en ese contexto cree o sabe que Mort es culpable. Resulta difícil imaginar que un sujeto sea capaz de compartimentar de esta manera sus creencias y sus pretensiones de conocimiento. Además, como suele señalarse, tanto las creencias como el conocimiento parecen comprometerse con un ideal de coherencia. Cuando una nueva creencia se agrega al corpus preexistente que suscribe un sujeto, debe poder ser integrada sin que existan contradicciones. En caso de haber una contradicción, solo una de las creencias puede continuar siendo afirmada. Podría abandonarse la creencia antigua o no incorporarse la nueva. Aceptar PCA-M implica rechazar esta plausible concepción y concluir que las nuevas creencias de un sujeto pueden entrar en contradicción con otras creencias previas sin que esto represente un problema o amerite una revisión en la que alguna de dichas creencias termine siendo rechazada. Esto parece conceptual y psicológicamente implausible.

Conclusión

En la primera sección del presente trabajo hemos presentado un argumento a favor de la tesis de que existen contextos en los que conocimiento moral y justificación moral de la acción pueden no confluir. Según vimos, esto ocurre cuando se dan simultáneamente una serie de factores. En primer lugar, el costo de que un sujeto actúe sobre la base de premisas erróneas es muy elevado para el bienestar de terceros. En segundo lugar, existe una probabilidad significativa, aunque sea pequeña, de que el error tenga lugar efectivamente. En tercer lugar, los afectados no han dado su consentimiento a la acción del sujeto. Dadas estas condiciones, si el agente decide seguir adelante con sus planes estará negando el estatus de agentes morales plenos a los afectados: estará tomando para sí mismo, indebidamente, la atribución de decidir por ellos si correr o no los riesgos involucra-

dos en la empresa que pretende llevar adelante. Si un sujeto debe dar este paso para actuar no puede considerarse que se encuentre moralmente justificado para hacerlo, aun cuando las premisas de sus decisiones resulten plausibles, también desde una perspectiva moral.

En la segunda sección del trabajo se formula y discute una objeción contra la tesis principal del mismo. Dicha objeción afirma que si un sujeto no se encuentra moralmente justificado para actuar sobre la base de sus creencias, no puede atribuirle a las mismas el estatus de conocimiento moral. La estrategia de respuesta ha consistido en mostrar la similitud que existe

entre los presupuestos de dicha objeción y las tesis principales de la posición epistemológica denominada “Injerencia Pragmática”. Se intentó demostrar que tal posición, dejando de lado el problema de su plausibilidad como tesis epistemológica, resulta indefendible cuando la aplicamos al campo moral. Para ello se sostuvo que el ejemplo utilizado en la primera sección para presentar nuestra propuesta puede ser interpretado como un contraejemplo de lo estipulado por el principio “Conocimiento-Acción” aplicado al campo moral. Asimismo, se procuró demostrar que dicho principio conduce a una problemática concepción contextualista de las nociones de creencia y conocimiento.

Notas

¹ Ver Fantl y McGrath (2002, 2007, 2009 y 2014).

² Ver Fantl y McGrath (2007, p. 558).

⁴ Ver Stanley (2005).

⁵ Ver Fantl y McGrath (2002, p. 68).

⁶ Para una crítica similar de IP, véase también Brown (2008) y Kvanvig (2011).

⁷ Ver Gaus (1995, p. 241).

⁸ Ver Bratman (1992, pp. 3-4) y Engel (1998, pp. 143-144).

Referencias Bibliográficas

- Bratman, M. (1992). Practical Reasoning and Acceptance in a Context, *Mind*, 101 (401), 1-15.
- Brown, J. (2008). Subject-sensitive Invariantism and the Knowledge Norm for Practical Reasoning, *Nous*, 42, 167-189.
- Conee, E. y Feldman, R. (2005). *Evidentialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Engel, P. (1998). Believing, Holding True, and Accepting, *Philosophical Explorations*, I, (2), 140-151.
- Fantl, J. y McGrath, M. (2002). Evidence, Pragmatics, and Justification, *The Philosophical Review*, 111, 67-94.
- Fantl, J. y McGrath, M. (2007). On Pragmatic Encroachment in Epistemology, *Philosophy and Phenomenological Research*, LXXV (3), 558-589.
- Fantl, J. y McGrath, M. (2009). *Knowledge in an Uncertain World*. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Fantl, J. y McGrath, M. (2014). Practical Matters Affect Whether you Know, en Steup, M. Turri, J. y Sosa, E. *Contemporary Debates in Epistemology*, Malden Ma., Wiley Blackwell, 84-95.
- Gaus, G. (1995). The Rational, the Reasonable and Justification, *The Journal of Political Philosophy*, 3 (3) 234-258.
- Kvanvig, J. (2011). Against Pragmatic Encroachment, *Logos & Episteme*, II, (1), 77-85.
- Reed, B. (2014). Practical Matters Do Not Affect Whether You Know, en Steup, M., Turri, J. y Sosa, E. *Contemporary Debates in Epistemology*, Malden Ma., Wiley Blackwell, 95-106.
- Stanley, J. (2005). *Knowledge and Practical Interests*. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Williams, B. (1973). Deciding to Believe, en *Problems of the Self*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 136-151.